

#### 4. LOS NUEVOS LEVIATANES Y LA POLIS DEMOCRÁTICA

En este capítulo nos dedicaremos a examinar un aspecto bastante específico de los avatares del estado y la democracia en la historia reciente de América Latina: las difíciles relaciones entre la reestructuración neoliberal en curso en los más diversos países de la región y el funcionamiento de las rápidamente obsoletas instituciones políticas típicas de los capitalismos democráticos. Esta “asincronicidad” en el cambio hizo que las transformaciones económicas hayan precipitado el vaciamiento y la crisis de las instituciones políticas supuestamente encargadas de representar a la ciudadanía y proveer una fórmula efectiva de gobierno que encarne la soberanía popular. Como es sabido, la amplitud y profundidad de los cambios experimentados en la segunda mitad del siglo xx –y muy especialmente desde el desencadenamiento de la llamada Tercera Revolución Industrial en los años setenta– ubican a nuestra convulsionada época como una de las más dinámicas y potencialmente revolucionarias de la historia universal, sólo comparable por su gravitación y trascendencia al fascinante período del Renacimiento.

El hilo conductor de este trabajo es una reflexión acerca de una de las consecuencias más significativas de estas transformaciones: la emergencia de un pequeño conglomerado de gigantescas empresas transnacionales, los “nuevos leviatanes”, cuya escala planetaria y extraordinaria gravitación económica, social e ideológica los constituye en actores políticos de primerísimo orden y causantes de un ominoso desequilibrio en el ámbito de las débiles instituciones y prácticas democráticas de las sociedades capitalistas. Paradojalmente, mientras algunos ideólogos celebran el “triunfo final” del capitalismo, habiendo supuestamente llegado al “fin de la historia” y asegurado la victoria de la democracia –lo que con mayor propiedad debería denominarse el laborioso advenimiento de los “capitalismos democráticos”–, las amenazas que se ciernen sobre esta forma estatal han adquirido una gravedad sin precedentes en su historia. Antes, en la coyuntura crítica de la entreguerra, aquéllas provenían de “afuera”: los fascismos y las dictaduras de diverso tipo que asediaban a los escasos y relativamente frágiles islotes democráticos que sobresalían en un océano de despotismo. Ahora, las amenazas anidan en el interior mismo de los capitalismos democráticos. No son externas sino internas y, lo que es peor, tienen un rostro “democrático”.

## MERCADOS Y DEMOCRACIA: CUATRO CONTRADICCIONES

Pareciera oportuno, en consecuencia, comenzar por referirse a la relación entre mercados y democracia, un tema que anuda la exclusión –económica, social y política– estructuralmente generada por la recomposición neoliberal del capitalismo con la decadencia de las instituciones de la democracia representativa. No hace falta abundar en demasiados detalles para comprender las razones por las que este tema, la relación entre mercados y democracia, se encuentra en el centro del debate actual de la teoría y la filosofía políticas. ¿Y esto por qué? Porque la radical reestructuración económica y social precipitada por la crisis del keynesianismo, desde mediados de la década del setenta y efectuada bajo el imperio de las ideas neoliberales, tuvo como resultado una expansión de los mercados sin precedentes en la historia mundial del capitalismo. Pero no se trata solamente de la creciente globalización de los mercados, fenómeno que salvo en el caso de las transacciones financieras se encuentra fuertemente sobredimensionado en la literatura. También se ha producido una inédita mercantilización de la vida social, por la cual casi la totalidad de ésta ha sido redefinida en términos mercantiles, lo cual dio origen a un notable desequilibrio en la relación entre mercado, estado y sociedad, en donde el crecimiento desorbitado del primero se hizo a expensas y en detrimento de los otros dos (Therborn, 1997, pp. 32-35). Producto de lo anterior es el ostensible achicamiento de los espacios públicos en las sociedades latinoamericanas, progresivamente asfixiadas por el súbito corrimiento de las fronteras entre lo público y lo privado en beneficio de este último y por un tan acelerado cuanto reaccionario proceso de “reconversión”, en función de una lógica puramente mercantil, de antiguos derechos ciudadanos tales como la educación, la salud, la justicia, la seguridad ciudadana, la previsión social, la recreación y la preservación del medio ambiente en remozados “bienes” o “servicios”, para utilizar la nada inocente terminología prevaleciente en el léxico del Banco Mundial y sus adláteres. La reconversión de derechos en mercancías significa, lisa y llanamente, no sólo una redefinición excluyente y restrictiva de los mismos sino que su disfrute pasa a estar mediado por la capacidad que tengan quienes aspiran a ellos de adquirirlos en el mercado. Y, por otro lado, que un grupo de grandes oligopolios asume ahora la redituable tarea de “vender” los viejos derechos que la alquimia neoliberal transformó en mercancías –bajo la forma de seguros de salud, escuelas privadas, jubilaciones por capitalización individual, etc.– a precios que le garanticen, como ocurre en nuestra región, fabulosas ganancias que, como si lo anterior fuera poco, prácticamente no pagan impuestos.

Esta apabullante presencia de los mercados y su hegemonía en crecientes sectores de la vida pública contemporánea, impensable hace apenas treinta o cuarenta años atrás, puso en cuestión un tema que antes ni siquiera se discutía: ¿cómo reconciliar este auge de los mercados con la preservación de la democracia? Porque, como sabemos, es evidente que la relación entre ambos sólo por excepción ha sido armoniosa, y esto debido básicamente a cuatro contradicciones que ponen de relieve la incompatibilidad entre ambas instituciones.

*¿Lógica ascendente o descendente?*

En primer lugar hay que señalar que la lógica de funcionamiento de la democracia, aún en una forma tan imperfecta como la que se conoce en el ámbito del capitalismo, es incompatible con la que prima en los mercados. Más allá de sus múltiples variantes, una democracia por elemental que sea remite a un modelo ascendente de organización del poder social (Bobbio, 1976[a]: pp. 28-29). Éste se construye, de abajo hacia arriba, sobre la base del reconocimiento de la absoluta igualdad jurídica y la plena autonomía de los sujetos constitutivos del “demos”. Las fórmulas concretas e históricamente situadas de esta construcción así como los criterios de inclusión y exclusión del “demos” son múltiples, desde la restrictiva democracia esclavista de Atenas en tiempos de Pericles hasta las inclusivas democracias “keynesianas” de los países escandinavos, pasando por las formas intermedias que conocemos en América Latina. En todas ellas, sin embargo, hay un proceso de participación pública que parte de la base y que –sea mediante la intervención directa de los ciudadanos o a través de variados sistemas de representación y delegación, más o menos “fieles” al mandato popular– culmina en la constitución de la autoridad política. Como decíamos más arriba, un supuesto esencial de este arreglo es la igualdad de los ciudadanos. En las democracias plenamente desarrolladas esto se traduce en la total inclusividad del “demos” en el proceso democrático, expresada en el sufragio universal e igual que supuestamente pondría fin a las seculares exclusiones de género, clase, educación y etnia.

El mercado, por el contrario, obedece a una lógica descendente: son los grupos beneficiados por su funcionamiento –principalmente los oligopolios– quienes tienen capacidad de “construirlo”, organizarlo y modificarlo a su imagen y semejanza, y lo hacen de arriba hacia abajo con criterios diametralmente opuestos a los que presiden la constitución de un orden democrático. Si en la democracia lo que cuenta es la base sobre la cual reposa, en los mercados los actores cruciales son los que se concentran en la cúspide. En la primera la decisión la toma supuestamente el pueblo, la ciudadanía; y aún cuando aquélla es casi invariablemente concebida y ejecutada por los grupos dominantes tiene de todos modos que bañarse en las aguas del Jordán de la legitimación popular. Aquí se abre todo un denso y más bien tenebroso capítulo de técnicas manipulatorias y propagandísticas, de manejo de la opinión pública, de engaños y represiones, pero que en todo caso testifica la necesidad, de cualquier tipo de democracia, de apelar en última instancia a la voz del pueblo, algo que ni siquiera remotamente existe en el mercado. En éste la decisión se origina y, más importante aún, se legitima arriba: las pretensiones de igualdad e inclusividad propias del orden democrático son por completo ajenas a la práctica y a la retórica discursiva vigentes en el mercado. Éste requiere de compradores y vendedores, los que en ningún caso son iguales. Salvo situaciones absolutamente excepcionales, sólo verificados en los capitalismos democráticos altamente desarrollados, ni los trabajadores, ni los consumidores ni los pequeños o medianos empresarios tienen voz alguna en los movimientos del mercado, y mucho menos los electores de la democracia. Téngase en cuenta además que hay una operación de compraventa esencial, que le imprime su huella gené-

tica al funcionamiento de todos los mercados y que tiene como resultado la introducción de una división estructural tanto entre los agentes económicos como entre los ciudadanos: la división entre los vendedores de la fuerza de trabajo y los que disponen del dinero para adquirirla. Esta operación primigenia introduce una distorsión radicalmente incompatible con la democracia, en la medida en que los vendedores de la fuerza de trabajo, los trabajadores, carecen de la autonomía necesaria para obrar y elegir racionalmente en función de sus preferencias debido a que, en alguna medida, son rehenes de los patrones. Estos pueden decisivamente condicionar su voto mediante diversas formas de extorsión, desde la “huelga de inversiones”, las amenazas de despidos o las relocalizaciones de plantas. En una palabra, prometiendo el “caos económico” si los electores no se comportan tal como ellos lo esperan. No obstante, esta situación de radical heteronomía de gran parte del “demos” es ignorada por las elaboraciones teóricas subsidiarias de la tradición del liberalismo democrático y por completo hegemónicas en la ciencia política, lo que otorga a sus argumentos un indisimulable aire de irrealidad; y también es ignorada por la economía neoclásica, que construye su discurso de la “libertad mercantil” de los agentes económicos a partir del “día después” de producida la violenta y nada democrática separación de los productores directos de la propiedad de los medios de producción, convirtiendo a los trabajadores en una mercancía más, la fuerza de trabajo, y desentendiéndose olímpicamente de sus consecuencias (Boron, 1997[a], pp. 69-144).

### *¿Participación o exclusión?*

Liberada de las restricciones que erige una estructura capitalista, la democracia está animada por una lógica incluyente, abarcativa y participativa, tendencialmente orientada hacia la creación de un orden político fundado en la soberanía popular. Una democracia cabalmente merecedora de ese nombre supone la completa identificación entre el pueblo y el “demos” de la polis. Sin embargo, en las distintas fases de la evolución del capitalismo democrático esta identidad estuvo muy lejos de satisfacerse. Exclusiones de diversa naturaleza impidieron, hasta fechas bastante recientes, la participación de las mujeres, los trabajadores, los analfabetos, los inmigrantes internos, ciertas etnias estigmatizadas (no necesariamente “minorías étnicas”, si se recuerda el caso del *apartheid* en Sudáfrica, en donde los excluidos conformaban la abrumadora mayoría de la población) y varias otras categorías sociales de distinto tipo. Si la democracia es gobierno “del pueblo, por el pueblo y para el pueblo”, según reza la fórmula de Abraham Lincoln, la participación del pueblo no puede sino ser tan irrestricta como inapelable su plena inclusividad.

Si bien en los últimos tiempos el capitalismo democrático toleró a regañadientes las iniciativas populares y democráticas tendientes a hacer coincidir al pueblo con el “demos”, o al pueblo con la ciudadanía poniendo fin a viejas exclusiones y proscripciones, lo cierto es que el proceso dista mucho de haber sido completado. Por una parte porque la remoción de los antiguos vetos y criterios de exclusión poco dice acerca de la efectividad del sufragio como instrumento para expresar y canalizar la voluntad popular. Si la

“oferta electoral” está viciada, porque en realidad no presenta alternativas reales sino una mera alternancia de nombres y partidos que responden a los mismos intereses fundamentales, entonces el silencio del pueblo se consume dialécticamente en la vocinglería del comicio. Un resultado similar se obtiene mediante la inducción de la apatía política, la persistente desvalorización de la política o de la esfera pública, que tiene como efecto el retraimiento de los ciudadanos y la abstención electoral. El neoliberalismo ha sido un maestro consumado en el arte de desacreditar la política y el espacio público: la primera es satanizada como el reino de los charlatanes, los holgazanes, irresponsables, mentirosos y corruptos; lo público como una esfera dominada por la ineficiencia, la irracionalidad, la corrupción y, en el mejor de los casos, por un ingenuo romanticismo que se desentien- de del egoísmo fundamental que modela la vida de los hombres y mujeres de carne y hueso. Por otra parte, hay todavía mucho por discutir en torno a la edad como criterio de admisión a la ciudadanía política: muchos adolescentes son sujetos de derecho civil a los 14 o 16 años, o son incorporados al servicio militar obligatorio a los 18, pese a lo cual recién se los habilita a votar a los 18 o a veces a los 21 años de edad. No vamos a entrar ahora en el tratamiento de estos temas. Lo que queríamos plantear era que cualquier orden democrático, por imperfecto que sea, tiene una tendencia irrefrenable a la inclusivi- dad total, a la transformación del pueblo en ciudadanía.

En el mercado prevalece una lógica completamente distinta. No existe en él una dinámica inclusionista ni, menos aún, un afán de potenciar la participación de todos. Por el contrario, la competencia, la segmentación y la selectividad son sus rasgos definitorios. En una palabra, si tendencialmente la democracia se orienta hacia la integración de todos, confiriendo a los miembros de la sociedad el status de ciudadano, el mercado opera sobre la base de la competencia y la “supervivencia de los más aptos”, y no está en sus planes promover el acceso universal de la población a todos los bienes que se transan en su ámbito. Como reza el neoliberalismo, el mercado es un espacio privado y para ingresar en él es preciso adquirir un billete de entrada, es decir, tener el dinero para ir a comprar los bienes que se pretende disfrutar; en el caso del que concurre a vender su fuerza de trabajo, debe esperar a ser invitado a ingresar –que le “den” trabajo– pero teniendo que correr por su cuenta los gastos que demande el acceso al mercado laboral.

El mercado es, en realidad, un ámbito de enfrentamientos despiadados –la esfera del egoísmo universal, como bien observaba Hegel– en el cual hay ganadores que son fuertemente recompensados y perdedores que son correspondientemente castigados. La participación en el consumo, a diferencia de la participación en la vida democrática, lejos de ser un derecho es en realidad un privilegio que se adquiere de la misma manera que cualquier otro bien en el mercado. Si en la democracia la participación de uno exige y potencia la participación de los demás, en el mercado el consumo de uno significa el no consumo del otro. La lógica de la democracia es la de un juego de sumas positivas. La del mercado es la de un juego de suma cero: la ganancia del capitalista es la insuficiencia del salario. Ergo, en el mercado para que alguien gane otro tiene que perder.

*¿Justicia o ganancia?*

En tercer lugar, la democracia está animada por un afán de justicia. No por casualidad Platón inicia el primer capítulo de *La República* –punto de partida de dos mil quinientos años de reflexión teórico-política a nivel universal– con una discusión sobre lo que constituye la virtud suprema de la polis. La respuesta que se ofrece al final de ese luminoso primer capítulo es que dicha virtud no puede ser otra que la justicia. En fechas recientes esta postura ha sido ratificada no sólo por las distintas variantes del pensamiento socialista sino también por el neocontractualismo liberal-igualitarista. John Rawls abre su libro con la siguiente afirmación: “La justicia es la primera virtud de las instituciones sociales” (1979, p.19). Por extensión es posible afirmar, en consecuencia, que la justicia también debe ser el objetivo final de la democracia, dado que en cuanto forma política específica de organización de la ciudad sería incongruente que la primera pudiera tener como valor supremo el logro de fines incompatibles con los de ésta.

Siendo esto así es oportuno entonces subrayar que la justicia supone el desarrollo de un argumento irreductible al cálculo de costo/beneficio que preside toda transacción mercantil. La democracia, por otro lado, es una ficción si no se apoya sobre una plataforma mínima de justicia. Si la justicia absoluta es imposible de alcanzar, un cierto mínimo de justicia –históricamente variable, por cierto– es absolutamente imprescindible para que, en palabras de Fernando H. Cardoso, se pueda “suprimir el olor a farsa de la política democrática” (1985, p. 17). En conclusión: es muy improbable y más que problemática la sobrevivencia de la democracia en una sociedad desgarrada por la injusticia, con sus desestabilizadores extremos de pobreza y riqueza y con su extraordinaria vulnerabilidad a la prédica destructiva de los demagogos<sup>1</sup>.

Ahora bien, si la justicia es el valor orientador de una democracia, el mercado es –por su estructura tanto como por la lógica de su funcionamiento– completamente indiferente ante ella. Lo que lo moviliza y lo pone en tensión es la búsqueda del lucro –el *ánimus lu-crandi* de los romanos– y la pasión por la riqueza. Lo que reina en su territorio es la ganancia y no la justicia, el rédito y no la equidad. La justicia es una molesta distorsión “extra económica” que interfiere en el cálculo de costos y beneficios y que sólo puede tener un efecto paralizante en la dinámica impiadosa de los mercados. Constituye una externalidad intrusiva, por completo ajena e irrazonable, a las expectativas de los agentes económicos enzarzados en una lucha sin cuartel por sobrevivir en un medio cada vez más hostil. Si a algo se parece el mercado es al lúgubre escenario hobbesiano de la guerra de todos contra todos, en la cual, como reconocía el autor del *Leviatán*, no hay justicia, ni ley ni moralidad. Obviamente, en esas condiciones difícilmente podría postularse una afinidad de funcionamiento entre los mercados y un orden democrático dado que los agentes que actúan en los primeros se ven compelidos a hacerlo bajo circunstancias en las cuales lo único sensato que se puede hacer es tratar de maximizar la tasa de ganancia a cualquier precio, pena de descender al infierno de la condición proletaria. Este rasgo fue certeramente captado por Karl Marx cuando, en el “Prólogo” a la primera edición de *El capital* escribía lo siguiente:

<sup>1</sup> Sobre el tema de la justicia, véase nuestro tratamiento en el capítulo 6 de este libro.

No pinto de color de rosa, por cierto, las figuras del capitalista y el terrateniente. Pero aquí sólo se trata de *personas* en la medida en que son *la personificación de categorías económicas, portadores de determinadas relaciones e intereses de clase*. Mi punto de vista, con arreglo al cual concibo como *proceso de historia natural el desarrollo de la formación económico-social*, menos que ningún otro podría responsabilizar al individuo por relaciones de las cuales él sigue siendo socialmente una creatura por más que subjetivamente pueda elevarse sobre las mismas (1975, t. 1, p. 8 [itálicas en el original]).

*¿De la polis a los mercados o de los mercados a la polis?*

Por último, la democracia posee una lógica expansiva que parte de la igualdad establecida en la esfera de la política –institucionalizada en el sufragio universal y en la igualdad ante la ley– y que impulsa al “demos” a tratar de “transportar” su dinámica igualitaria hacia los más diversos terrenos de la sociedad y la economía (Bowles y Gintis, 1982; 1986). Ésta ha sido la historia de los capitalismos democráticos en nuestro siglo: en virtud de la fuerza y la capacidad movilizadora de los sindicatos, los partidos de izquierda y las organizaciones representativas de las clases y capas populares se produjo una progresiva conquista de derechos sociales y económicos que, al menos en parte, se tradujeron en beneficios tangibles y concretos para los trabajadores. El resultado de tales éxitos fue un creciente proceso de “socialización de demandas” por el cual una amplia gama de exigencias y necesidades consideradas “privadas” en el capitalismo decimonónico –como la salud, la educación, la seguridad social, la recreación, etc.– se convirtieron en bienes colectivos cuya efectiva provisión pasó a depender de una radical redefinición del papel tradicionalmente jugado por los estados nacionales. Como es bien sabido, el keynesianismo fue la fórmula política que asumió esta mutación en el régimen de acumulación y en el modelo de hegemonía burguesa (Buci-Glucksmann y Therborn, 1981; Negri, 1991; Offe, 1984). Mediante el mismo se produjo un formidable avance en el proceso de ciudadanización y en la integración de las masas al estado, todo lo cual cristalizó en una inédita democratización de la sociedad y del estado en el capitalismo desarrollado. En la periferia el fenómeno adquirió menor intensidad, en gran medida al amparo de regímenes populistas y socialistas, pero sus efectos sociales, económicos y políticos tuvieron de todas maneras una honda repercusión.

Claro está que esta expansividad propia de un modelo democrático se contrapone a un movimiento en sentido contrario que se origina en los mercados. Si en las coyunturas de ascenso de la lucha de clases y de ofensiva de los sectores populares la democratización de los capitalismos se tradujo en la mencionada “socialización de demandas”, en la fase que se constituye a partir de la contraofensiva burguesa lanzada desde finales de los años setenta lo que se verifica es un proceso diametralmente opuesto de “privatización” o “mercantilización” de los viejos derechos ciudadanos. El correlato de todo esto es la consagración de un “estado desertor” que se desentiende de sus “responsabilidades sociales” al paso que redobla y perfecciona su intervención en favor de los intereses más elementales de

la burguesía. Visto desde otro ángulo este proceso asume la forma de una acentuada –y, según los países, acelerada– “desciudadanización” de grandes sectores sociales víctimas del arrollador predominio de criterios económicos o contables en esferas antaño estructuradas en función de categorías éticas, normativas o, al menos, extra mercantiles. Derechos, demandas y necesidades previamente consideradas como asuntos públicos se transformaron, de la noche a la mañana, en cuestiones individuales ante las cuales los gobiernos de inspiración neoliberal consideran que nada tienen que hacer salvo, eso sí, crear las condiciones más favorables para que sea el mercado quien se encargue de darles una respuesta. El “transporte” de criterios de “costo-beneficio”, “eficiencia” y “racionalidad económica” desde la economía al ámbito de la ciudadanía y el estado remata en la recreación de un nuevo orden político signado por la desigualdad y exclusión propias de los mercados en la arena hasta entonces dominada por el igualitarismo de la política. Si antes la salud, la educación o el más elemental acceso al agua potable eran derechos consustanciales a la definición de la ciudadanía, la colonización de la política por la economía los convirtió en otras tantas mercancías a ser adquiridas en el mercado por aquellos que puedan pagarlas.

#### UNA RECONCILIACIÓN PROVISORIA Y SUS REQUERIMIENTOS

A la luz de estas cuatro contradicciones es evidente que el tema de la compatibilidad entre mercado y democracia es, a largo plazo, imposible y en el corto y mediano plazos bastante problemática. Sin embargo, para el liberalismo en cualquiera de sus variantes la convivencia resulta absolutamente natural y necesaria: la democracia es percibida como el rostro político de los mercados y éstos como la faz económica de la primera<sup>2</sup>. Esta creencia pareció haber sido efectivamente confirmada durante el período comprendido entre la reestructuración keynesiana puesta en marcha desde la Gran Depresión –y con más fuerza desde finales de la Segunda Guerra Mundial– y mediados de la década del setenta. La súbita celebridad adquirida por la ideología del “fin de las ideologías” o del “fin de la lucha de clases” es testimonio elocuente del triunfalista clima de opinión que se había apoderado de la burguesía (Bell, 1960; Lipset, 1963).

Sin embargo, agotado ese período –por cierto, el más esplendoroso en toda la historia del capitalismo– las viejas rencillas y las conocidas incompatibilidades saltaron una vez más al primer plano. La extraordinaria difusión que, en esos años, adquirieron diversos pronósticos marcados por un profundo pesimismo (recordemos, simplemente, las predicciones catastrofistas del Club de Roma o los sucesivos informes de la Comisión Trilateral, especialmente el relativo a la ingobernabilidad de las democracias) demuestran los alcances del cambio experimentado por el clima ideológico-político de Occidente (Meadows, 1972; Crozier *et al.*, 1975).

Es que las posibilidades de armonizar mercados y democracia se asentaban sobre una realidad que los teóricos del liberalismo se empeñan todavía hoy en negar: que en esa

<sup>2</sup> Hemos explorado este asunto en nuestro *Estado, capitalismo y democracia en América Latina*, *op. cit.*, caps. 2 y 3.

época de oro que transcurriera entre 1948 y 1973 los mercados se hallaban sujetos a un estricto control político mediante una densa red de regulaciones e intervenciones de todo tipo. Fue precisamente este control el que abrió espacio a un profundo proceso de democratización, habida cuenta de la debilidad relativa de las fuerzas del mercado. A partir de la recomposición neoliberal y la consiguiente redefinición del papel del estado la situación cambia radicalmente, y lo que observamos, en el centro tanto como en la periferia, es un proceso de progresivo vaciamiento o debilitamiento de las instituciones democráticas. En todo caso, para los teóricos liberales la supuesta armonía entre mercados y democracias descansa sobre dos premisas que la historia se ha encargado de desmentir: una, relativa a las características progresivamente más igualitarias que habría de asumir la estructura social del capitalismo; otra, referida a la eficacia misma de las instituciones democráticas y su capacidad para corregir las tendencias más desequilibrantes de los mercados. Veamos estas dos premisas con mayor detalle.

*El paraíso perdido: los fallidos pronósticos sobre la  
evolución de la desigualdad en las sociedades capitalistas*

Tal como decíamos en el capítulo primero de este libro, las previsiones teóricas del liberalismo acerca del futuro de la desigualdad podían sintetizarse en dos enunciados principales: por una parte, que las desigualdades económicas y sociales inherentes a los mercados libres y competitivos fluctuarían dentro de límites razonables; por otro lado, que con el paso del tiempo dichas desigualdades tenderían a disminuir, evitando la polarización social que los padres del liberalismo económico clásico consideraban como lacras típicas de los modos de producción precapitalistas. Esto era así porque, entre otras razones, se suponía que en la sociedad capitalista el acceso a la propiedad privada no estaba cerrado. Desaparecidos los odiosos estamentos cerrados de la sociedad feudal los agentes económicos no estaban fatalmente condenados a permanecer en una misma situación social por el resto de su vida. En el pensamiento de John Locke –bien conocido por Adam Smith, por cierto– la amenaza del hambre y la pobreza se atemperaba ante la posibilidad, siempre existente, de que el hambriento pudiera “votar con sus pies” y emigrar hacia las interminables llanuras de América del Norte en pos de su prosperidad. Por otra parte, el liberalismo clásico también postulaba que, precisamente por obra de los mercados, la tendencia predominante en el terreno de la desigualdad social sería hacia la baja, acortando las distancias que separaban a ricos y pobres. Estas eran, por ejemplo, las expectativas que tenía Adam Smith, el padre fundador de la filosofía económica del liberalismo. Smith, que antes de ser economista fue un gran filósofo moral, estaba convencido de que el libre juego de la mano invisible de los mercados iría a producir una sociedad en donde según sus propias palabras, la riqueza estuviera “armoniosamente distribuida”.

Sin embargo, las previsiones teóricas del liberalismo clásico fueron desmentidas por los hechos: las desigualdades en los sucesivos países incorporados a la órbita del capitalismo se hicieron cada vez mayores y el paso del tiempo sólo habría de agigantarlas. Por

otro lado, el filósofo escocés también suponía que el protagonista exclusivo de los mercados sería la miríada de pequeños propietarios independientes. Jamás se le ocurrió pensar que, un par de siglos después, los actores decisivos de la vida mercantil llegarían a ser grandes firmas de propietarios anónimos, y mucho menos empresas transnacionales actuando a escala planetaria. Su visión del paisaje social del capitalismo era otra, que obedecía a una doble inspiración. Doctrinariamente, abrevaba en la doctrina lockeana que entendía a la propiedad privada como una extensión de la personalidad del propietario: éste mezclaba su trabajo con los dones naturales de la tierra y a partir de esa fusión se legitimaba la propiedad, que por fuerza siempre iría a quedar acotada a reducidas dimensiones. Históricamente, la perspectiva de Smith estuvo fuertemente influida por la experiencia de la implantación del capitalismo en las colonias de Nueva Inglaterra, en donde la figura heroica de ese proyecto no era otro que el pequeño propietario rural, el *farmer*. Es por esto que la idea de un capitalismo de anónimas empresas transnacionales o de gigantescas megafusiones era por completo ajena a su imaginación y carecía de lugar en su esquema teórico: constituía una verdadera aberración, una resurrección de los odiados monopolios surgidos –según su entender– a la sombra de los favores del absolutismo. Los monopolios eran los enemigos mortales de aquello que Smith denominaba el “sistema de la libertad natural”. Por lo tanto, al hablar del mercado Smith estaba en realidad invocando a una miríada de productores independientes, gente que trabajaba en su pequeña empresa o en sus emprendimientos familiares y que, en la mejor tradición lockeana, fundían su trabajo personal con los bienes terrenales legitimando de ese modo la propiedad privada como institución. Hoy sabemos que todos estos rasgos son apenas nostálgicos recuerdos de un pasado, el de las colonias americanas, que la concentración y centralización del capital hizo trizas de manera inmisericorde.

Pese a todo, las expectativas optimistas relativas a la marcha de la igualdad social parecieron satisfacerse por un cierto tiempo durante el apogeo del estado keynesiano –a costa de una creciente intervención estatal en los mercados. Pero, a partir de mediados de la década del setenta, y sobre todo con la reestructuración neoliberal del sistema capitalista –con su sostenido ataque en contra del estado y las políticas sociales, fulminadas como “populistas” o “irracionales”– lo que ha ocurrido es un alarmante aumento de la desigualdad económica y social no sólo en los países de la periferia del sistema capitalista sino entre éstos y los países centrales e inclusive en el propio corazón del sistema, en los países industrializados. Esto lo han observado autores e instituciones muy diversos. Una comparación internacional efectuada por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) comprobó que en 1960 el 20% más rico de la población mundial percibía un ingreso 30 veces superior al 20% más pobre. Pese al escándalo producido por la revelación de estas cifras, cuando se dieron a conocer las correspondientes al año 1990 pudo establecerse que a pesar de todos los programas de ayuda las disparidades de ingresos se duplicaron, llegando a ser 59 veces mayores que el ingreso del 20% más pobre. En 1997 este ratio era de 74 a 1 (PNUD, 1999, p. 3).

Estas tendencias se reprodujeron en los más diversos países. En América Latina el fenómeno es bien conocido y perceptible inclusive por el observador más desprevenido.

En los países del capitalismo avanzado estas deprimentes tendencias también se hicieron sentir con mucha intensidad. Informes procedentes de la Unión Europea hablan de la existencia de 50 millones de pobres en el Viejo Mundo, y de la humillante aparición de la “sociedad de los dos tercios” que condena al tercio restante a la exclusión mientras reserva los beneficios del progreso y el desarrollo para los dos tercios integrados. El caso de Estados Unidos –en donde cerca de 35 millones de personas viven por debajo de la línea de pobreza– es bien ilustrativo: en 1977 el 5% más rico obtenía el 16,8% del ingreso nacional. Para 1989 esta proporción había ascendido al 18,9%, y en las postrimerías del primer mandato de Bill Clinton ya superaba el 21%, lo que llevó a la revista conservadora británica *The Economist* a asombrarse ante esta “tasa de crecimiento sin precedentes” en los índices de concentración del ingreso, ¡particularmente perverso si se recuerda que esto tiene lugar en un contexto de recuperación económica y no de depresión! (1996, pp. 30-33). Sin embargo, las tendencias a la concentración de la riqueza son más pronunciadas aún que las de los ingresos: si en 1983 el 5% más rico de la sociedad americana poseía el 56% de toda la riqueza de Estados Unidos, hacia 1989 esta proporción se había incrementado al 62% y el movimiento parece no tener límites especialmente si se tiene en cuenta el fracaso de la Administración Clinton en poner coto a la ofensiva conservadora en el Congreso (Wolff, 1995, p. 29). Es seguramente en virtud de todo este cúmulo de evidencias que el economista Richard Freeman ha sugerido que Estados Unidos están avanzando en dirección a una “*apartheid economy*”, en la cual “los ricos viven aislados en sus suburbios exclusivos y en sus opulentos departamentos, sin conexión alguna con los pobres que habitan en los *slums*” (1996).

Ahora bien, ante un proceso de reconcentración de rentas e ingresos tan acentuado como el que caracteriza la reestructuración neoliberal es muy difícil sostener el funcionamiento de un régimen democrático. ¿Por qué? Porque uno de los requisitos más importantes de la democracia es la existencia de un grado bastante avanzado de igualdad social. Ningún teórico de la democracia fue tan iluso como para sostener que ésta sólo podía funcionar una vez abolidas todas las diferencias de clase. Pero todos sin excepción –cualquiera que fuese su orientación y las simpatías que le despertase este régimen político, desde Platón hasta Marx, pasando por Maquiavelo, Hegel y de Tocqueville– coincidieron en un pronóstico: la democracia no puede sustentarse sobre sociedades signadas por la desigualdad y la exclusión social. Para que el régimen democrático funcione se requiere de sociedades que superen un cierto umbral de igualdad social, y ésta, como lo recordaba el propio Adam Smith, debía ser de condiciones y no tan sólo de oportunidades. Por lo tanto, hay razones muy poderosas para preocuparse cuando, como en nuestros países se adoptan políticas de exclusión social y empobrecimiento masivo en aras de un supuesto productivismo y eficientismo económicos erigidos al rango de valores supremos del estado. En el fondo, lo que se está haciendo es sacrificando la democracia en el altar del mercado y la justicia a cambio de la ganancia. El caso de la Rusia poscomunista constituye un ejemplo extremo de estas tendencias: a causa de la violenta reintroducción del capitalismo la esperanza de vida al nacer de los varones se redujo, entre 1989 y 1994, en poco más de 6 años, pese a lo cual el coro de economistas del *establishment* no cesa de cantar loas a la sensatez

y racionalidad del nuevo estado de cosas. ¿Cómo vanagloriarse por estos supuestos “éxitos” económicos cuando para lograrlos fue necesario construir sociedades cada vez más injustas y desiguales y con pobres que pagan con sus vidas los costos de tamaños experimentos? (UNICEF, 1995, p. 27).

*La otra “dualidad de poderes”  
sufragio universal versus voto del mercado*

En los últimos años ha surgido una literatura crítica de los enfoques tradicionales sobre las “transiciones” y las “consolidaciones” democráticas que puntualiza las muchas deficiencias, extravíos e insuficiencias de las “democratizaciones realmente existentes” y, de paso, de las teorizaciones que en su momento hicieran los “transitólogos” (Boron, 1997[a]: pp. 7-48; O’ Donnell, 1992; 1996). Se trata, en el caso latinoamericano, de democracias carcomidas por la pobreza y la polarización social, la crisis y/o disolución institucional, la corrupción política, la indiferencia gubernamental ante las necesidades de la sociedad civil y el consecuente desencanto de la ciudadanía. Ahora bien, cabe preguntarse lo siguiente: ¿cuáles son las implicaciones que una situación como ésta tiene sobre la vida –y la calidad de esa vida– de una democracia?

Para responder a esta pregunta es conveniente tomar nota de los comentarios formulados por George Soros en un reportaje publicado por el diario italiano *La Repubblica*. Como se recordará, Soros es el multimillonario norteamericano de origen húngaro que conmoviera a los mercados mundiales con sus temerarias intervenciones en la plaza de Londres y que produjera, entre otras cosas, el derrumbe de la libra esterlina. En la mencionada entrevista el magnate aseguraba que “los mercados votan todos los días”. En la Argentina esta opinión había sido expresada por el diario de negocios *Ámbito Financiero* cuando en medio de una feroz corrida bancaria –producida a comienzos de 1989– celebró con alborozo el advenimiento de la era de los “golpes de mercado” en reemplazo de los ya anacrónicos cuartelazos militares. Pero Soros elaboró bastante más su argumento: “No caben dudas”, continúa diciendo, “que los mercados fuerzan a los gobiernos a adoptar medidas impopulares que, sin embargo, son indispensables. Decididamente, el verdadero sentido del estado reposa hoy en los mercados” (1995).

En su entrevista, y en posteriores escritos, Soros vino a ratificar lo que los críticos del capitalismo habían sostenido desde siempre. Como se recordará, tanto Marx como Engels se refirieron reiteradamente a este asunto. El chantaje de los capitalistas mediante los empréstitos a los gobiernos, las especulaciones bursátiles, el “riesgo país” y la huelga de inversiones son manifestaciones muy claras al respecto. Siendo esto así, si los mercados votan todos los días, ¿en qué posición queda el humilde y anónimo miembro del “demos” –sostén último de un régimen político que dice gobernar en su nombre y para su bien– que en países como los nuestros vota cuando lo dejan? Si tiene la oportunidad de votar regularmente el ciudadano de América Latina lo puede hacer cada dos años, y en elecciones muchas veces caracterizadas por: (a) su irrelevancia en función de su impoten-

cia para reorientar las políticas gubernamentales, salvo casos excepcionales; (b) la poca transparencia en lo relativo al financiamiento de las campañas electorales, lo que coloca a los partidos del *establishment* en una situación de radical superioridad en relación a los demás; (c) el desigual acceso a los estratégicos medios de comunicación de masas, que refuerza el voto conformista y conservador; (d) el dudoso recuento de los votos, que en algunos casos se traduce en fraudes escandalosos, como por ejemplo el que le costara la presidencia a Cuauhtémoc Cárdenas en México en 1988 o las elecciones del 2000 en el Perú; y (e) los amañados sistemas de representación que traducen los votos populares en escaños parlamentarios, sobrerrepresentando sistemáticamente el peso de los partidos de la derecha.

En términos generales, el cuadro pintado por Soros plantea una serie de graves interrogantes que los teóricos del liberalismo democrático se han esmerado en ignorar. ¿Cómo comprender, a la luz de los valores y las normas democráticas, que haya quienes votan todos los días (y logran que sus preferencias se traduzcan en políticas gubernamentales) mientras que la abrumadora mayoría de la sociedad lo hace una vez cada dos o tres años y con escasísimas posibilidades de que la orientación de su voto modifique la conducta del gobierno? ¿Hasta qué punto puede ser considerado como democrático un estado que consiente tamaña desigualdad en el ejercicio de los derechos políticos? ¿Podemos llamar “democrático” a un régimen político de ese tipo, apenas un taparrabos para disimular la vigencia de una dominación plutocrática recubierta por una fachada plebiscitaria que nada tiene que ver con su efectiva estructura y funcionamiento? Esa democracia, en suma, ¿no es acaso una forma benigna de “dictadura burguesa”?

En vísperas de la revolución rusa, Lenin y Trotsky acuñaron la expresión “dualidad de poderes” para dar cuenta del hecho de que junto al gobierno de la burguesía se había ido constituyendo otro, débil y embrionario, pero ya existente: el gobierno de los soviets. Esta situación, empero, sólo podía ser transitoria, y tarde o temprano se resolvería en favor de uno de los dos polos de acumulación de poder. Si en el marco de la revolución rusa esta “dualidad de poderes” asumía un signo democrático, la que se ha configurado en el capitalismo, de fin de siglo y que contrapone a un gobierno supuestamente democrático, surgido del sufragio universal, el poder de los monopolios concentrados en el mercado, tiene evidentes connotaciones reaccionarias. En efecto, el “voto en el mercado” instituye un ámbito privilegiado al cual acceden sólo unos pocos. De esta forma el capitalismo democrático exhibe una dualidad destinada a producir consecuencias tan duraderas como deplorables. Por un lado, el comicio tradicional en el cual se expresa la voluntad del “demos”. Es ése el lugar en el que se teatraliza el simulacro democrático al permitir que todos voten. Claro está que bajo las condiciones arriba señaladas esta convocatoria se convierte en un gesto ritual, cargado de efectos ideológicos reforzadores de la ilusión fetichista de la igualdad ciudadana pero carentes de resultados concretos a nivel de las políticas estatales. En el terreno del comicio clásico –descendiente remoto y casi irreconocible del ágora ateniense y de la asamblea popular imaginada por Rousseau– todos votan pero su participación rara vez llega a ser decisiva y nunca es decisoria. Los “nervios del gobierno”, para usar la feliz expresión de Karl Deutsch, exigen algo más que un

estímulo que fugazmente reaparece cada dos años. Este puede, en ocasiones, ser importante, porque a veces permite elegir (y no tan sólo optar) quién habrá de ser el primer ministro, presidente o miembro del parlamento; pero este “mandato” del “demos” poco tiene que ver con lo que los magistrados electos efectivamente habrán de hacer. De eso se encarga “el otro poder”, el mercado, cuyos pocos y selectos participantes hacen oír su voz todos los días –en la bolsa de valores, en la cotización del dólar, en los pasillos y los “anillos burocráticos” del poder– y cuyas decisiones y preferencias son muy tenidas en cuenta por los gobiernos porque estos saben que difícilmente podrían resistir más de unos pocos días a la extorsión, o al soborno, de los capitalistas. Una huelga de inversiones, una fuga de capitales, o la simple desconfianza de las clases propietarias ante un anuncio gubernamental o un recambio de ministros puede arruinar una obra de gobierno, o forzar el abandono de proyectos reformistas, en un par de semanas. La experiencia de Salvador Allende en Chile y de François Mitterrand en Francia es suficientemente ilustrativa al respecto.

A raíz de esta perversa “dualidad de poderes”, el mercado instituye un segundo –y muy privilegiado– mecanismo decisorio: un sistema de voto calificado, esencialmente antidemocrático, y aislado por completo de los influjos y demandas que pudieran proceder del ciudadano común y corriente. En un régimen como éste son muy pocos, apenas un puñado, los actores que pueden votar todos los días: en ese escenario privilegiado donde se dirimen las grandes decisiones estatales y la orientación de las políticas públicas, las que cuentan son las grandes firmas (la mayoría de ellas de origen transnacional e indiferentes ante la suerte que puedan correr los países en los cuales operan) y ciertos megaconglomerados económicos que desde remotos centros de poder económico y financiero internacionales elaboran una estrategia de intervención en los mercados de la periferia. Los demás no cuentan: no sólo los trabajadores, sino que tampoco lo hacen las capas medias, la pequeña burguesía y otros grupos y fracciones del empresariado. En estos santuarios del neoliberalismo que son los mercados votan tan sólo los segmentos más concentrados del capital. El resto queda excluido. Algunos podrían argüir que del lado del pueblo queda todavía la famosa soberanía del consumidor, tan ensalzada por la retórica neoliberal. Sin embargo, en América Latina, el continente con las mayores desigualdades de riqueza e ingresos del mundo, dicha soberanía brilla por su ausencia y, aún cuando existiera, su impacto concreto sobre los gobiernos sería apenas discernible. En síntesis, tenemos en nuestros países una democracia escindida y que reposa sobre la dinámica de mercados altamente oligopolizados cuyas preferencias en materia de política económica son rápidamente reconocidas y atendidas por los gobiernos. Al mismo tiempo, la democracia se presenta también como un periódico simulacro de la escena electoral, pero donde el “mandato” de los electores tiene bajísimas chances de ser escuchado salvo, eso sí, en lo tocante a la determinación de quienes habrán de ser los gobernantes o los legisladores, pero no de qué forma habrán de gobernar o legislar. Ni ciudadanos ni consumidores. Estamos, por consiguiente, en el peor de los dos mundos: democracias sin soberanía popular y mercados sin soberanía del consumidor.

## LOS “NUEVOS LEVIATANES” Y EL REZAGO DE LAS INSTITUCIONES DEMOCRÁTICAS

En la teoría política la palabra “leviatán” evoca de inmediato la imagen abrumadora del estado absolutista conjurado por Thomas Hobbes para poner fin al terror del estado de naturaleza y la lucha de “todos contra todos”. En el contexto de las guerras civiles de la Inglaterra del siglo XVII, la propuesta hobbesiana remataba en un estado capaz de concentrar en sus aparatos una masa fenomenal de recursos de todo tipo –principalmente coactivos y jurídicos– de suerte tal que le permitiera disciplinar inapelablemente a los actores sociales enzarzados en una lucha mortal. La garantía última del nuevo orden emanado del contrato se fundaba en la supremacía que el estado ejercía sobre las clases y asociaciones constitutivas de la sociedad civil. Sin esta desproporción en favor de la autoridad pública la capacidad arbitral del estado se debilitaría irreparablemente y la sociedad se precipitaría, una vez más, al caos de la guerra de todos contra todos. Hobbes lo afirmó con su habitual causticidad cuando, en una página memorable del *Leviatán*, recordara que “Los pactos que no descansan en la espada no son más que palabras” (1980, p. 137).

En las postrimerías del siglo XX puede construirse un argumento que revierta radicalmente los términos del planteamiento hobbesiano. ¿En qué sentido? En el sentido de que los leviatanes son ahora muchos, y no sólo uno como quería el filósofo político. Y, más importante todavía, esos leviatanes son privados: son las grandes empresas que en las últimas décadas han afianzado su predominio en los mercados mundiales hasta límites inimaginables hace apenas unas pocas décadas atrás. Como sabemos, el poderío que hoy caracteriza a los megaconglomerados de la economía mundial –gigantescas burocracias privadas que no rinden cuenta ante nadie ni ante nada– no tiene precedentes en la historia.

De allí que sea posible interpretar el impresionante retroceso social experimentado por las sociedades capitalistas contemporáneas –mayor polarización social, pobreza extrema, marginación, desempleo de masas, etc.– como resultado de dos órdenes de factores. Por una parte, la formidable ofensiva lanzada por los sectores más recalcitrantes de la burguesía una vez agotado el ciclo expansivo y reformista de la segunda posguerra, avance que, ciertamente, fue posible ante la derrota experimentada por la izquierda y el movimiento obrero en los más variados frentes de combate. En segundo lugar, porque esta regresión sin precedentes podría haber sido al menos atenuada si es que las instituciones y prácticas de la democracia representativa hubieran sido más consistentes y eficaces. Pero sabemos que esto no ha sido así, especialmente en las regiones periféricas del capitalismo neoliberal. Si la fortaleza de los estados democráticos en los países de la OCDE impidió el restablecimiento irrestricto del salvajismo de los mercados, la debilidad que caracterizaba a sus contrapartes latinoamericanas hizo que la reacción burguesa avanzara en su proyecto de recomposición hasta niveles inconcebibles a mediados de los años ochenta. En todo caso, lo cierto es que las instituciones democráticas se encuentran en crisis no sólo en la periferia sino también, aunque en menor medida, en los capitalismos centrales. ¿A qué obedece esta circunstancia? Nos parece que a algo bastante simple de

comprender: si la naturaleza de los mercados, las clases y las instituciones económicas del capitalismo cambió extraordinariamente a lo largo del último medio siglo, las instituciones políticas de los capitalismos democráticos apenas si experimentaron alguna modificación, habiendo sido por consiguiente completamente sobrepasadas por la dinámica de los acontecimientos históricos. Veamos esto más detenidamente.

Los mercados se han vuelto crecientemente oligopólicos, su competencia despiadada, y la gravitación de sus firmas dominantes es inmensa. Además, se proyectan en una dimensión planetaria. El flujo de transacciones especulativas y financieras que se procesa en un sólo día en la ciudad de Nueva York equivale a siete veces el PBI de la Argentina, o a casi cinco veces el PBI del Brasil. Esas mismas transacciones movilizan, en un sólo día, una cifra de un orden de magnitud muy superior al que registra el comercio mundial en todo un año. “Cada quincena, el volumen de especulación electrónica que circula por Manhattan iguala al producto total del mundo” (Scavo, 1994, pp. 152-153). James Tobin, Premio Nóbel de Economía, ha observado que si se gravase apenas con el 0,5% el flujo financiero internacional se obtendría en un año una cifra mínima cercana a los 30.000 millones de dólares, que podrían aplicarse al financiamiento de programas de lucha contra la pobreza o a la liquidación de la deuda externa que agobia a las economías del Tercer Mundo. Obviamente que, teniendo en cuenta que las transacciones de tipo especulativo constituyen un 95% del total, si se impusiera una tasa más elevada –digamos el 5%– su impacto bienhechor sobre la economía mundial sería mucho más significativo sin afectar para nada el funcionamiento de la economía real.

La fenomenal aceleración experimentada por la velocidad de rotación del capital –gracias al desarrollo de la microelectrónica, las telecomunicaciones y la computación– ha sido pródiga en consecuencias de todo tipo. Por una parte, porque estas modificaciones en el desarrollo de las fuerzas productivas tuvieron una influencia considerable –en combinación con otros factores, naturalmente– a la hora de definir la pugna hegemónica en favor del capital financiero y en desmedro de los sectores de la burguesía más ligados a la producción de bienes y servicios, revirtiendo de ese modo el resultado que había cristalizado en la fase de la inmediata posguerra. En segundo lugar, porque el ascenso del capital especulativo profundiza las tendencias recesivas de la economía mundial, agudiza el problema del desempleo en las economías industrializadas y acentúa aún más el peso de la deuda externa en los países de la periferia. Tercero, porque dichas transformaciones precipitaron la mundialización de los procesos económicos y financieros otrora relativamente contenidos en los marcos de los estados nacionales. En relación a la tan meneada globalización es preciso afirmar que, como acertadamente lo observara Aldo Ferrer, la misma está bien lejos de ser un fenómeno novedoso (1995). Lo nuevo es la escala que ha asumido en los últimos tiempos, no la tendencia del capitalismo a convertirse en un sistema mundial que, como se recordará, ya había sido señalada por Marx y Engels en *La ideología alemana* y en el *Manifiesto comunista*. Recordemos sus palabras en el último de los textos mencionados, cuya actualidad no deja de sorprender: “Espoleada por la necesidad de dar cada vez mayor salida a sus productos, la burguesía recorre el mundo entero. [...] Mediante la explotación del mercado mundial, la burguesía dio un carácter cosmopolita a

la producción y al consumo de todos los países.” Y culminan advirtiéndolo que “La burguesía [...] obliga a todas las naciones, si no quieren sucumbir, a adoptar el modo burgués de producción, las constriñe a introducir la llamada civilización, es decir, a hacerse burgueses. En una palabra: se forja un mundo a su imagen y semejanza” (Marx y Engels, 1848, pp. 23-24).

En síntesis, el proceso viene de muy lejos y comienza con el amanecer del capitalismo. Además, y contrariamente a lo que pregonan los epígonos del neoliberalismo, la globalización tampoco es un proceso armónico y equilibrado que se limita a diseminar por toda la vastedad del planeta los logros del desarrollo capitalista. En realidad si algo ha ocurrido con ella ha sido la acentuación de las desigualdades sociales y regionales del sistema, producto del hecho de que, por primera vez en la historia, el capital es el presupuesto y el resultado del proceso productivo en todos los rincones del planeta.

La afirmación de estas tendencias en los últimos años se correspondió, por otra parte, con un marcado proceso de concentración y centralización del capital cuyo resultado ha sido la emergencia de una pléyade de megaempresas, verdaderos “nuevos leviatanes” de dimensiones colosales que constituyen una amenaza gravísima para las democracias. Unas pocas cifras bastan para mostrar con elocuencia lo que venimos diciendo: los ingresos combinados de los 500 gigantes de la economía mundial alcanzaron en 1994 la suma de 10.245,3 billones de dólares, es decir una magnitud que equivale a una vez y media el PBI de Estados Unidos; diez veces mayor que el PBI de toda América Latina y el Caribe en 1990; 25 veces mayor que el PBI de la más grande economía de América Latina (el Brasil) y unas 40 veces mayor que el PBI de la Argentina (Dieterich, 1995, p. 50).

Pero no es sólo el tamaño descomunal de estas empresas lo que nos interesa. Nos importa ante todo señalar la magnitud del desequilibrio existente entre el dinamismo de la vida económica –que ha potenciado la gravitación de las grandes firmas y empresas monopólicas en las estructuras decisorias nacionales– y la fragilidad o escaso desarrollo de las instituciones democráticas eventualmente encargadas de neutralizar y corregir los crecientes desequilibrios entre el poder económico y la soberanía popular en los capitalismos democráticos. En otras palabras: las recientes transformaciones económicas y tecnológicas del capitalismo han agigantado el peso y la eficacia de la intervención práctica de la burguesía hasta niveles inimaginables hace apenas una generación y ante el cual la influencia de los anónimos y atomizados ciudadanos de la democracia se convierte en un dato apenas microscópico de la vida política. Por si lo anterior fuera poco, la vertiginosa rapidez con la cual los grandes conglomerados empresariales pueden movilizar y transferir enormes sumas de dinero –y, por consiguiente, multiplicar su gravitación política– contrasta llamativamente con la escasez de recursos, lentitud, e ineficacia de las tradicionales instituciones de la democracia representativa.

En efecto, la soberanía popular todavía se expresa, salvo momentáneas y puntuales excepciones, mediante instituciones, procedimientos y formatos organizacionales que corresponden al siglo XVIII o tal vez antes –el modelo de Westminster, con sus comisiones parlamentarias y el estilo de trabajo instituidos luego de la llamada Revolución Gloriosa de 1688– y sobre los cuales se han superpuesto ciertas innovaciones propias de la

primera mitad del siglo xx. Mientras la revolución tecnológica y científico-técnica de nuestro tiempo ha trastocado por completo tanto las estructuras como las estrategias de funcionamiento de los grandes agentes económicos, no parece haber ocurrido lo mismo en el terreno de la democracia política. Contrariamente a lo sucedido en la vida económica, las inmensas posibilidades que la microelectrónica y la informática han abierto para el perfeccionamiento de las prácticas democráticas –desde la potenciación de la capacidad estatal de regulación de los mercados hasta la realización de periódicos “referenda virtuales” sobre temas controversiales, pasando por el acrecentamiento de la capacidad ciudadana de controlar a sus propios representantes y el mejoramiento de los procedimientos electorales– se encuentran todavía en el terreno de lo conjetural. Un sólo ejemplo sirve para ilustrar lo que venimos diciendo: compárense las 30.000 operaciones simultáneas de inversión o desinversión que puede regularmente procesar a escala mundial la supercomputadora de la firma Morgan Stanley, de Wall Street, con la lentitud de los recuentos electorales, los trámites parlamentarios o las actuaciones judiciales en algunas democracias latinoamericanas. Dadas estas condiciones, ¿hasta qué punto es posible controlar o regular a un “blanco móvil” tan extraordinariamente dinámico como las megacorporaciones transnacionales –o los movimientos internacionales de capitales que ellas promueven– con los exigüos recursos y obsoletas tecnologías de que disponen nuestros empobrecidos y diezmados estados nacionales?

En virtud de estas transformaciones, los monopolios y las grandes empresas que “votan todos los días en el mercado” han adquirido una importancia decisiva (y sin tener que vérselas con contrapesos democráticos de ninguna índole) en la arena donde se adoptan las decisiones fundamentales de la vida económica y social: el Ejecutivo –principalmente los ministerios de Economía y Hacienda–, los autonomizados bancos centrales– y las “alturas” del estado. La universal decadencia de los parlamentos facilitó enormemente las cosas para los nuevos amos de la economía mundial. Esta situación plantea un problema crucial para la teoría democrática: ¿cómo contrabalancear la desorbitada gravitación de estos actores, que corroe hasta su raíz la legitimidad del proceso democrático? ¿Cuáles son las instituciones, normas o instrumentos idóneos para ejercer un control democrático sobre estas gigantescas burocracias privadas, como las de las megaempresas transnacionales, o públicas, como el Banco Mundial (BM) y el Fondo Monetario Internacional (FMI)? El peso que en los despachos oficiales tienen personajes como George Soros; o Bill Gates, el dueño de Microsoft; o Ted Turner, el dueño de la CNN; o el que tienen los tres gerentes de los fondos de inversión más importantes de Estados Unidos –que manejan conjuntamente una masa de dinero líquido del orden de los quinientos mil millones de dólares, es decir, casi dos veces el producto bruto de la Argentina– es incomparablemente superior al de cualquier ciudadano, partido político o movimiento social de una democracia “realmente existente”. La masa de recursos (monetarios, tecnológicos, o de cualquier otro tipo) con que cuentan estos grandes conglomerados empresariales es de tal magnitud que, en mercados tan altamente vulnerables, volátiles y dependientes como los de América Latina, hace que sus gestos y sus menores insinuaciones (para no hablar de estrategias tales como relocalización de inversiones, “salida” de las

bolsas locales, “corridas” contra la moneda local, etc.) sean prontamente percibidos por los gobiernos como mortales amenazas a la estabilidad macroeconómica y política, y que sus reclamos sean prestamente satisfechos anteponiéndose a los que puedan formular los trabajadores y cualquier otro grupo local. Las reivindicaciones de los obreros, los empleados públicos, los maestros, los campesinos, los desocupados, los jubilados, las diversas minorías y los ciudadanos en general se redefinen y priorizan en función de los intereses de la coalición capitalista que controla los mercados internacionales. Los trabajadores podrán organizar huelgas, invadir tierras, ocupar fábricas y sitios urbanos, y casi invariablemente la respuesta oficial oscilará entre la represión y la indiferencia, pero pocas veces será el temor. No ocurre lo mismo cuando la “amenaza” proviene de los capitalistas. El gobierno de Raúl Alfonsín, en la Argentina, resistió sin mayores daños las 13 huelgas generales que en contra de sus políticas económicas propiciara la Confederación General del Trabajo. Sin embargo, bastó con un sólo “golpe de mercado” –propinado en febrero de 1989– para sellar el destino de su gobierno y poner fin, en términos prácticos, a su mandato como presidente.

En suma, las empresas transnacionales y las gigantescas firmas que dominan los mercados se han convertido en protagonistas privilegiados de nuestras débiles democracias. En términos de *accountability* y *responsiveness* –dos palabras que no por casualidad carecen de traducción en español y portugués puesto que no reflejan ninguna práctica histórica de nuestros gobernantes– los gobiernos de la región responden primero y antes que nada a la coalición capitalista que, bajo la hegemonía del capital financiero, domina el espacio económico mundial y dispone de poderosos instrumentos de sanción y control ideológico para disciplinar a los desobedientes. Estos incluyen desde la huelga de inversiones y las calificaciones de riesgo realizadas por los mismos acreedores de la deuda externa latinoamericana, pasando por la mala prensa en los órganos de la comunidad empresaria internacional, hasta el control disciplinario de las finanzas públicas que realizan el FMI y el BM, amén de sus funciones como apóstoles del nuevo orden. Luego de atender a estos poderosísimos intereses y de desvivirse por satisfacer sus menores requerimientos los gobiernos de la región reciben en segundo lugar a los socios y representantes locales de la gran burguesía planetaria. Más tarde es el turno del capital local, en sus múltiples fracciones y las pequeñas y medianas empresas. Finalmente llega el momento de los trabajadores, los asalariados, los desocupados y toda la corte de los condenados de la tierra, cuyas demandas apenas si son escuchadas y para quienes la respuesta oscila entre una benévola indiferencia hasta una abierta hostilidad y represión.

El predominio de los nuevos leviatanes en esta “segunda y decisiva arena” de la política democrática, que es la que verdaderamente cuenta a la hora de tomar las decisiones fundamentales, confiere a aquéllos una gravitación excepcional en la esfera pública y en los mecanismos decisorios del estado, con prescindencia de las preferencias en contrario que, en materia de políticas públicas, ocasionalmente pueda expresar el pueblo en las urnas. En los alfombrados despachos de sus gerentes generales reposa el éxito o el fracaso de la política económica, “madre” de todos los éxitos que pueda cosechar un gobierno y/o comadrona de (casi) todos sus fracasos. Los grandes capitalistas disponen del di-

nero, la tecnología, los recursos y, para colmo, son estos los encargados de “certificar” que un gobierno es creíble, y de emitir señales tranquilizadoras y atractivas a los hipersensibilizados, turbulentos e histéricos mercados mundiales para que estimulen el flujo de inversiones hacia las enigmáticas regiones del sur.

Es preciso recordar que los intereses de la coalición capitalista dominante a escala mundial son adecuadamente protegidos por una serie de actores estratégicos de alcance planetario. En primer lugar, por una densa red de organismos financieros internacionales entre los cuales sobresalen el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial y los grandes bancos comerciales, con su séquito de *think tanks*, comunicadores sociales, publicistas y académicos entregados ardorosamente a la propagandización de las ideas neoliberales. En segundo lugar, por los gobiernos de los países centrales y sus autoridades monetarias y financieras, incluyendo naturalmente a los presidentes de los bancos centrales, que por un lado elaboran refinados discursos convocando a combatir la pobreza pero por el otro promueven la adopción de políticas que la generan y la reproducen casi sin límites. Tercero, por los economistas, esos sustitutos modernos de los teólogos medievales y que salvo honrosas y puntuales excepciones han depuesto todo vestigio de pensamiento crítico plegándose sin reparos al paradigma dominante en su profesión. Cuarto, por la vocinglería y el activismo de organizaciones empresariales, partidos “reconvertidos” al neoliberalismo y movimientos sociales de diverso tipo que respaldan la “sensatez” de los “talibanes” de mercado.

La defensa de estas prerrogativas del gran capital –intrínsecamente antidemocráticas– suele utilizar como pretexto el carácter supuestamente “privado” de sus decisiones y políticas empresariales. Sus voceros ideológicos no escatiman esfuerzos denunciando preventivamente el atropello que significaría cualquier interferencia en los negocios de dichas empresas y el daño irreparable que tal acción infligiría a la delicada sensibilidad de los mercados. El castigo que sufriría un país que cometiera semejante osadía sería una suerte de ostracismo económico internacional, como el ocasionado por las atrocidades del Khmer Rouge en Camboya o el autoimpuesto aislamiento del régimen albanés en los años sesenta. Sin embargo, el más elemental de los razonamientos es suficiente para comprobar que lo único que tienen de privado esas megaempresas globales es la propiedad de los medios de producción y sus ganancias, lo que ciertamente no es poca cosa. Pero su desproporcionada gravitación en los mercados y la decisiva influencia que ejercen sobre las diferentes economías nacionales las convierte en actores públicos no menos importantes que los propios estados nacionales, y a menudo inclusive más. Considerar a agentes económicos de esta envergadura como meros actores privados –sujetos a las mismas normas de derecho que se aplican en los contratos de compraventas de automóviles, departamentos y refrigeradores– no puede ser otra cosa que un alarde de formalismo juricista totalmente alejado de la realidad y cuya función conservadora no es demasiado difícil advertir (Pasukanis, 1975; Tigar y Levy, 1978; Heller, 1942; Adler, 1979). Buena parte de la riqueza del análisis gramsciano del estado capitalista radica precisamente en su capacidad para desmontar el velo mistificador que el derecho burgués utiliza para postular una rígida separación entre lo público y lo privado, y entre “sociedad civil” y es-

tado (Gramsci, 1977). En efecto, Gramsci planteó con razón que el formalismo de esa distinción no puede ocultar el hecho de que ciertas asociaciones que el derecho burgués considera como “privadas” son en realidad parte del estado, concebido éste en un sentido “ampliado” (sociedad civil + sociedad política) y no como la mera estructura administrativa, representativa y represiva del gobierno y el sistema de partidos. Lo que define sustantivamente –por oposición a un encuadramiento meramente juricista del problema– el carácter público o privado de una institución es, según Gramsci, la función específica que ella desempeña en la creación o reproducción de un conjunto de relaciones sociales, ideas y valores que permiten “adecuar” a los hombres y mujeres de una determinada época histórica a los imperativos del modo de producción dominante. Esta tarea puede ser realizada por la Iglesia (como en la Italia del *Risorgimento*), la escuela pública (como en la fase oligárquica de algunos estados latinoamericanos) o, en nuestra época, por un medio masivo de comunicación como la televisión, que pese a ser predominantemente de propiedad privada desempeña una función esencialmente política en países como la Argentina, Brasil y México –y, en el mundo desarrollado, en Estados Unidos– para no citar sino los ejemplos más claros en esta materia.

En consecuencia, dejar que estos “nuevos leviatanes” actúen en los espacios nacionales cual si fueran ignotos e inofensivos individuos equivale a crear las condiciones propicias para un cataclismo social de incalculables proporciones. Más allá de retorcidos razonamientos doctrinarios, la democracia puede sintetizarse en la feliz fórmula ideada por Abraham Lincoln cuando la definiera como el gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo. En suma, la democracia es en *ultima ratio* soberanía popular, algo incompatible con el predominio sin contrapesos de los intereses de la gran burguesía tal como actualmente lo estamos viendo en América Latina. Pero en esta tragicómica involución del capitalismo neoliberal de fin de siglo algunos estados de la región se han aproximado, como nunca antes, a la lapidaria caracterización que del estado burgués hicieron Karl Marx y Friedrich Engels en el *Manifiesto Comunista*, al decir que aquél es un “mero comité que administra los asuntos comunes de la clase burguesa”. El resto cuenta bien poco: los sectores populares, las capas medias e inclusive algunos segmentos muy importantes del capital medio están condenados al ostracismo político y social y sus intereses y demandas son desoídas. En términos más tersos y académicos, pero que remiten a un argumento esencialmente análogo, Adam Przeworski replanteó recientemente esta cuestión argumentando que “[T]oda la sociedad depende estructuralmente de los actos de los capitalistas” (1985, p. 162). Siendo esto así, ¿es posible en una sociedad de este tipo avanzar en la extensión y profundización de la democracia preservando la intangibilidad del capitalismo?

### ¿MERCADOS O NACIONES?

La soberanía popular que se expresa en un régimen democrático debe necesariamente encarnarse en un estado nacional. Es posible que en el futuro esto no sea así y que el sistema interestatal ceda su lugar a una nueva configuración política internacional. Pero,

mientras tanto, la sede de la democracia continuará siendo el estado-nación. Ahora bien: ¿cuál es el drama de nuestra época? Que los estados, especialmente en la periferia capitalista, han sido concientemente debilitados, cuando no salvajemente desangrados, por las políticas neoliberales a los efectos de favorecer el predominio sin contrapesos de los intereses de las grandes empresas. Como consecuencia de lo anterior los estados latinoamericanos se convirtieron en verdaderos “tigres de papel” incapaces de disciplinar a los grandes actores económicos y, mucho menos, de velar por la provisión de los bienes públicos que constituyen el núcleo de una concepción de la ciudadanía adecuada a las exigencias de fin de siglo (Boron, 1996).

Por el contrario, en los capitalismos avanzados el estado no ha dejado de fortalecerse, pese a la proliferación de discursos que postulan precisamente lo contrario. Poco tiempo atrás la revista británica *The Economist* publicó un informe especial sobre el gasto público con el sugestivo título de “La mano visible”. El dossier finaliza con una conclusión melancólica: *big government is still in charge*. A pesar de la vocinglería ideológica neoliberal, las “reformas” que tuvieron lugar entre 1980 (época en que se lanzaron los programas de ajuste y los planes de austeridad fiscal) y 1996 no impidieron que el gasto público de las 14 naciones más avanzadas de la OECD subiera del 43,3% del PBI al 47,1% (Crook, 1997, p. 8). Las palabras del artículo ahorran mayores comentarios y merecen por eso mismo ser reproducidas *in extenso*:

El crecimiento de los gobiernos de las economías avanzadas en los últimos cuarenta años ha sido persistente, universal y contraproducente. [...] En Occidente, el progreso hacia un gobierno más pequeño ha sido más aparente que real. Si se examina cuidadosamente el asunto, aún los reformistas más convencidos –Ronald Reagan en Estados Unidos y Margaret Thatcher en el Reino Unido– no lograron gran cosa. En el resto de Occidente el estado siguió creciendo, salvo por los efectos ocasionales de alguna crisis fiscal (1997, p. 48).

Una somera indicación de los alcances del extravío latinoamericano en materia de gasto público y reforma del estado se torna evidente a partir de una sencilla operación. Si comparamos las cifras de ventas de algunas de las grandes empresas transnacionales con las correspondientes al producto bruto de los países latinoamericanos en el año 1992 y compilamos una lista unificada de estados y empresas hallaríamos a la cabeza de la misma al Brasil, con un producto bruto de 360 mil millones de dólares. Luego vendría México con 329 mil millones y a continuación la Argentina, con 228 mil millones. Luego comienzan a aparecer una serie de “países” muy extraños: General Motors, con 132 mil millones; Exxon, con 115 mil millones, Ford, con 100 mil millones, Shell, con 96 mil millones; Toyota, IBM, y después aparece Venezuela, con 61 mil millones, y al final Bolivia con apenas 5.300 millones de dólares de producto bruto (UNRISD, 1995, p. 154).

¿Qué lecciones se desprenden de un listado tan heterogéneo como éste? Que la capacidad de negociación de nuestros países con estos gigantes de la economía mundial se ha visto menoscabada a lo largo de las últimas décadas. Mientras los estados de la peri-

feria se achicaban y debilitaban al ritmo impuesto por los ajustes neoliberales de los años ochenta y los noventa, los estados de los países centrales se fortalecían y el rango y volumen de operaciones de las megacorporaciones se acrecentaban extraordinariamente. Como bien lo recuerda el citado informe del UNRISD, entre 1980 y 1992 las ventas de las megacorporaciones crecieron a más del doble, mientras que los estados sufrieron las sangrías ocasionadas por la ortodoxia neoliberal auspiciada por esas mismas empresas (1995, p. 53). El movimiento de tijeras hizo que los segundos quedasen en una posición cada vez más desventajosa en relación con las primeras. Aquellos estados tienen escasas posibilidades de lidiar con estos nuevos “leviatanes” de la economía mundial. No se encuentran totalmente inermes, pero las probabilidades de ejercer un control efectivo sobre las grandes empresas son muy limitadas. Esto es particularmente cierto en el caso de países con economías pequeñas: ¿cuáles son los instrumentos con que cuenta un gobierno democrático de Bolivia para negociar con una corporación como la General Motors, cuya cifra de ventas anuales es veintiséis veces superior a la de su producto bruto? ¿Cómo podrían hacerlo la totalidad de los países del África Subsahariana, cuyo producto bruto combinado es levemente superior a las ventas anuales de la General Motors y la Exxon? (UNRISD, 1995, pp. 153–154).

La realidad es que nuestros estados son hoy mucho más dependientes que antes, agobiados como están por una deuda externa que no cesa de crecer y por una “comunidad financiera internacional” que en la práctica los despoja de su soberanía al dictar las políticas económicas dócilmente implementadas por los gobiernos de la región. Sin embargo, por una de esas paradojas de la historia, en estas condiciones de intensificación sin precedentes de la heteronomía nacional las teorizaciones sobre la dependencia o el imperialismo son desestimadas como meros anacronismos cuando, en realidad, ellas han adquirido una vigencia mayor aún de las que alcanzaron a tener en la década del sesenta. Sin entrar en comparaciones odiosas no creo posible refutar la tesis de que países como la Argentina, Brasil y México son hoy muchísimo más dependientes de lo que lo eran en los años sesenta. A esto hay que añadir que las perspectivas de la autodeterminación nacional –un corolario necesario de la soberanía popular– se cierran aún más bajo la égida del neoliberalismo al prevalecer una ideología autoincriminatoria que so pretexto de la “reforma del estado” lo conduce a su radical debilitamiento y su casi completa destrucción. En consecuencia, la fenomenal desproporción entre estados y megacorporaciones constituye una amenaza formidable al futuro de la democracia en nuestros países. Para enfrentarla es preciso, (a) construir nuevas alianzas sociales que permitan una drástica reorientación de las políticas gubernamentales y, por otro lado, (b) diseñar y poner en marcha esquemas de cooperación e integración supranacional que hagan posible contraponer una renovada fortaleza de los espacios públicos democráticamente constituidos al poderío gigantesco de las empresas transnacionales.

Un vicio imperdonable de muchos economistas, producto de la crisis teórica y la asombrosa estrechez de miras que caracteriza a la disciplina en estos días, ha sido el de considerar a los países como mercados y a los estados como empresas y, por lo tanto, espacios neutros que deben adecuar su comportamiento al patrón adoptado por firmas y

empresas. Sin embargo, pese al economicismo dominante, nuestros países son antes que nada naciones y, tan sólo luego, sedes de mercados. En los años del auge petrolero mexicano Carlos Fuentes escribió un memorable artículo en el *New York Times* con el siguiente título: “¡México no es un pozo de petróleo!”. La ideología dominante no por casualidad resignifica a los países convirtiéndolos en grises mercados, todos uniformizados por la dinámica incesante de la oferta y la demanda. Es que el debilitamiento de los estados nacionales facilitado, por un lado, por la extinción práctica de la idea de nación –supuestamente subsumida bajo la corriente “civilizatoria” de la globalización– y, por el otro, por el imperio de las políticas “orientadas hacia el mercado” culmina en la degradación de la nación al rango de un mercado. Además, lo anterior significa aceptar –tal como lo hace el discurso dominante de la economía– que los hombres y las mujeres de la democracia son despojados de su dignidad ciudadana y se convierten en instrumentos, en simples medios, al servicio de los negocios de las empresas. No hay ciudadanía en los mercados. Reducir los significados, el destino y el propósito por el cual vivimos en sociedad a la mera obtención de una tasa de ganancia nos parece, a la luz de la ética y la teoría política, de una sordidez incalificable, aparte de ser una operación que sella ominosamente el destino de las democracias tan laboriosamente conquistadas en América Latina.

### TRES CONCLUSIONES

Aún a riesgo de simplificar excesivamente nuestros argumentos, permítasenos ahora bosquejar tres conclusiones finales:

#### *Sobre estados y mercados*

A la luz de los razonamientos anteriores es imprescindible repensar la relación estado-mercados, algo particularmente importante en una época como ésta en donde se ha convertido en un artículo de fe decir que tenemos un estado muy grande y que hay que achicarlo. Se trata, sin dudas, de una creencia completamente equivocada y maligna, que debe ser criticada revelando la función ideológica que ella cumple al servicio del capital. En efecto, la realidad demuestra que el tamaño de los estados latinoamericanos es pequeño comparado con el de los del Primer Mundo. El estado argentino, por ejemplo, aparte de ser raquítico, deforme, ineficiente y corrupto también es chico. Lo mismo ocurre en el resto de América Latina. Pese a ellos, los neoliberales quieren hacer de este enano raquítico y deforme algo todavía más grotescamente pequeño. Se trata de un verdadero dislate, comprensible por las grandes ventajas que ofrece a los monopolios y las megacorporaciones la práctica liquidación del estado y de cualquier sistema capaz de regular los mercados. Pero comprensible también por la ofuscación y el dogmatismo que caracterizan a los apóstoles del neoliberalismo y que los lleva a sacralizar los mercados y satanizar

al estado. El tamaño medio del estado latinoamericano equivale aproximadamente a la mitad del que hallamos en el promedio de los países del Primer Mundo. Reducir aún más nuestros estados es una locura en un continente donde la mitad de la población vive por debajo de la línea de pobreza, carece de agua potable y servicios cloacales y no dispone de cobertura médica alguna. No menos insensata es otra propuesta, íntimamente relacionada con la anterior, que impulsan algunos “desinteresados” expertos: nada menos que abolir el impuesto a las ganancias o reducir la “elevada” presión tributaria que padecen los países latinoamericanos. En relación a lo primero basta con recordar que en América Latina los impuestos a las ganancias como proporción del PBI equivalen aproximadamente a la quinta o sexta parte de lo que representan en los países del primer mundo. ¿Es razonable tratar de reducirlos aún más? La presión tributaria en América Latina, por otra parte, es aproximadamente la mitad de la que existe en los países de la OCDE. En consecuencia: el problema de nuestra región no es ése sino el hecho de que nuestros sistemas tributarios son increíblemente regresivos, recaudan poco y mal –principalmente entre los asalariados y los pobres– y propician la evasión y la elusión tributaria de las grandes empresas y de las grandes fortunas, que están considerablemente menos gravadas que en el mundo desarrollado (Boron, 1996).

En relación al mito del “estado grande” latinoamericano un reciente estudio del Banco Mundial revela que el gasto público en los países de “bajos ingresos” oscila en torno al 23%, mientras que en las “economías industriales de mercado” –¿tal vez por su incontenible adhesión al “populismo económico”? –aquél se sitúa en alrededor del 40%. En América Latina el gasto público de Guatemala es del 11,8%; en Gabón esta cifra se derrumba hasta un abismal 3,2%. En Suecia, en cambio, llega al 55% (UNRISD, 1995, p. 154; Banco Mundial, 1991, p. 139). Pese a que algunos aseguran que el neoliberalismo, con su prédica anti-estatista, es el seguro camino que nos conduce al desarrollo, y teniendo estos datos a la vista: ¿no estaremos en realidad dirigiéndonos a Guatemala, o a Gabón, en lugar de ir a Suecia? Y si seguimos marchando en dirección a Gabón, ¿no corremos acaso el riesgo de poner en cuestión la mera supervivencia de la sociedad civil en las complejas sociedades latinoamericanas?

Si nuestros países deciden marchar hacia el Primer Mundo lo primero que hay que hacer es abandonar y revertir las políticas que pusieron en práctica los gobiernos neoliberales de la región. Entre otras cosas, esto significa que en algún momento habrá que encarar seriamente el tema de la reconstrucción del estado, destruido por el celo ideológico del neoliberalismo. No se trata de proponer un estado “grande” sino un estado fuerte en un sentido financiero y organizacional, honesto y dotado de persuasivas capacidades de intervención y regulación en la vida económica y social. La Argentina tuvo, en el pasado, un estado grande por el número de sus agentes pero penosamente débil en términos operativos: su capacidad para disciplinar a los agentes económicos más poderosos fue casi siempre nula. Luego de la “reforma del Estado” encarada por el gobierno de Menem hay un estado que es más chico y más débil que antes y que no sirve para nada. Habrá que reconstruirlo desde sus cimientos. Lo mismo cabe decir de la mayoría de los países de América Latina. Lo que en nuestra región se ha dado en llamar la “reforma del es-

tado” ha sido, en realidad, “el nombre pomposo [...] de una reforma que nunca llegó más allá de una reforma de la estabilidad del empleo público” (de Oliveira, 1996, p. 95). Despidos masivos y descentralización irresponsable –en la medida en que no fue acompañada por una nueva legislación tributaria que garantizara los recursos necesarios para las provincias, departamentos y municipios– fueron las marcas de las reformas neoliberales del estado, cuyo objetivo fundamental ha sido asegurar el superávit fiscal necesario para el pago de la deuda externa y no la racionalización del sector público. Tal como lo expresara Moisés Naim, un ex ministro de Industrias de Venezuela, al final de los años noventa “Washington podría encontrarse con algunas sorpresas en el sur. América Latina, que ha pasado los últimos diez años demoliendo el estado, tendrá que invertir los próximos diez en reconstruirlo” (1993, p. 133).

### *Sobre el neoliberalismo y la buena sociedad*

La segunda cuestión: debemos interrogarnos muy seriamente acerca de la valoración que merece un modelo económico y social como el neoliberal que cuando “funciona bien” genera desocupación –a los inéditos niveles que tenemos hoy en la Argentina– y niveles crecientes de pobreza, desigualdad y polarización social y empobrecimiento. O que cuando logra reducir en una fracción del 1% la tasa de desempleo, como en Estados Unidos, genera un cuasipánico bursátil y la caída de la bolsa de valores de Nueva York. Es imprescindible rechazar enérgicamente los argumentos de los economistas ortodoxos, que reducen la evaluación de la marcha de una sociedad al desempeño de un conjunto estandarizado de variables cuantitativas (Bresser Pereira *et al.*, 1993, pp. 199-219). La pregunta esencial para evaluar las “reformas orientadas al mercado” –eufemismo de la reestructuración neoliberal del capitalismo– debe ser, en cambio, la siguiente: ¿están dichas reformas creando una buena sociedad, o una sociedad mejor que la que teníamos antes? ¿Son estas reformas conducentes al logro de una sociedad más justa, humana, democrática, próspera, liberadora y ecológicamente sustentable? La observación más superficial de la realidad latinoamericana basta para probar que no nos estamos moviendo en esa dirección. De nada vale un presupuesto fiscal equilibrado, o una inflación “cero”, o un superávit de la balanza comercial si nuestras sociedades se derrumban, si la miseria prolifera en las ciudades y campos, si cada día hay más niños que crecen en las calles, si los desocupados son una legión cada vez más numerosa, si el empleo se precariza y los salarios no alcanzan, si la criminalidad nos abrumba y si la sociedad se escinde en un polo que se desvive por ostentar su opulencia y otro que no puede ya más ocultar su indigencia. Llegó la hora de hacer callar a la economía y volver a escuchar a la teoría política y la filosofía moral.

Por otra parte, el hecho de que aún en sus fases “exitosas” un modelo como el neoliberal produzca tales rezagos sociales plantea al menos dos serias cuestiones. Una, ¿cuánta pobreza y exclusión social puede resistir un régimen democrático? Segunda, ¿por cuánto tiempo puede la democracia soportar las tensiones creadas por las agravadas inequida-

des estructurales del nuevo ordenamiento económico? No existen muchas experiencias históricas que demuestren que un régimen democrático puede sostenerse indefinidamente en condiciones de hundimiento de los sectores populares, de creciente pauperización de los sectores medios y de niveles de desocupación y de exclusión social –¿desciudadanización?– como los que hoy prevalecen en la Argentina y varios otros países de América Latina. En el mejor de los casos pueden subsistir las formalidades y los rituales externos de la vida democrática –una suerte de simulacro baudrillardiano– pero privadas de todo significado y sustancia. Conviene entonces preguntarse, si nos importa tanto la democracia: ¿no es una insensatez adoptar un modelo económico cuya incompatibilidad con la democracia salta a la vista, sacrificando valores esenciales como la dignidad de la persona humana y deteriorando sensiblemente la calidad de la vida social? Consultado a propósito de los “logros” de las reformas neoliberales en el Chile de Pinochet Friedrich Hayek admitió en una entrevista publicada por el diario *El Mercurio* estar preparado para sacrificar, por un tiempo indefinido, la democracia a la libertad de los mercados. Su actitud se justificaba en la –¿ingenua?– creencia de que pese al aberrante paréntesis impuesto a la democracia la fuente libertaria de los mercados haría que más pronto que tarde las libertades políticas se regenerasen como por obra de milagro. Ningún demócrata, y mucho menos un socialista, podría convalidar semejante locura. Pero, como todos sabemos, los criterios que establecen la línea que demarca la locura de la cordura son productos sociales y la sociedad capitalista ha sido sumamente eficaz en identificar la crítica social con la locura y la delincuencia, mientras que los sofismas de los defensores del sistema son tenidos por sesudas reflexiones de analistas rigurosos y responsables. Es por esto que en estos tristes tiempos de hegemonía neoliberal la sensatez es confundida con la sinrazón y el delirio aparece vestido con los ropajes de la razón.

### *Sobre la izquierda y las utopías*

Es preciso recordar y evitar ser abrumados por la ideología dominante: nada en la historia autoriza a pensar que el neoliberalismo como fórmula económico-política de gobierno ha alcanzado una hegemonía total y definitiva. Sumergidos bajo su influencia, e impresionados por la súbita “conversión” de numerosos intelectuales –otrota críticos vehementes del capitalismo– a su credo, grandes segmentos de nuestras sociedades parecen resignados a pensar que el mundo será, de aquí en más, neoliberal hasta el fin de los tiempos. Aunque tardíamente, los mercados se habrían “cobrado su revancha” por tantas décadas de desprecio u hostilidad a manos de socialistas autoritarios (al estilo soviético), o de gobiernos cuya vacilante adhesión a las leyes del mercado terminó por arrojarlos a los brazos del keynesianismo, con su funesta secuela de intervencionismo estatal y hostigamiento a los mercados.

Sin embargo, los tiempos del neoliberalismo serán mucho más cortos de lo que se supone. Su “gran promesa” ha quedado penosamente desvirtuada por los hechos. Los datos presentados a lo largo de este libro, suficientemente elocuentes y demuestran que tan-

to en los capitalismos desarrollados como en la periferia la restructuración neoliberal se hizo a expensas de los pobres y de las clases explotadas. La propiedad de los medios de producción no se “democratizó”, las desigualdades económicas y sociales no se atenuaron y la prosperidad no alcanzó a derramarse hacia abajo, como aseguraba reconfortantemente la *trickle down theory*.

La realidad es que las sociedades que el neoliberalismo construyó a lo largo de estos años son peores que las que las precedieron: más divididas y más injustas, y los hombres y mujeres viven bajo renovadas amenazas económicas, laborales, sociales y ecológicas. Claro está que entre el fracaso de un modelo y su reemplazo efectivo por otro hay un paso, a veces muy grande y demorado. Es más, entre ambos media un estado de toma de conciencia que aún no se ha verificado en la mayoría de las sociedades capitalistas, todavía deslumbradas con las ilusiones alimentadas por los medios de comunicación de masas controlados por los capitalistas. Esa toma de conciencia, por otro lado, requiere para su concreción de la existencia de una propuesta política que sea socialmente percibida como una alternativa al *statu quo*. El grave problema que caracteriza a nuestra época es que mientras el neoliberalismo exhibe evidentes síntomas de agotamiento, el modelo de reemplazo todavía no aparece en el horizonte de las sociedades contemporáneas. En su momento Antonio Gramsci se refirió a situaciones análogas, y a los peligros que ellas encierran, cuando llamó la atención sobre “lo viejo que no termina de morir y lo nuevo que no acaba de nacer”. En este lúgubre interludio, advertía Gramsci, pueden ocurrir toda clase de fenómenos aberrantes y las patologías sociales y políticas pueden alcanzar dimensiones insospechadas. Un simple repaso de los temas de nuestro tiempo confirma la validez de este pronóstico: explosión de fundamentalismos, vigoroso resurgimiento del racismo (incluyendo la tenebrosa “limpieza étnica”), extensión de la “narcopolítica” y la corrupción, diseminación incontrolada de armas y componentes nucleares, “golpes de mercado” y auge de la especulación financiera a escala planetaria, etc. ¿Por cuánto tiempo habrá de prolongarse esta agonía? No lo sabemos. Lo que sí sabemos, y nos revitaliza en nuestras luchas, es que “[H]istóricamente, el momento de viraje de una ola es siempre una sorpresa”, y que el neoliberalismo puede sucumbir mucho antes de lo esperado (Anderson, 1997 [b]: p. 27).

Haciendo gala de su talento de historiador, Perry Anderson planteó que las fuerzas progresistas debían extraer tres lecciones de las vicisitudes históricas del neoliberalismo (1997 [a]: pp. 147-151). La primera aconsejaba no tener ningún temor a estar absolutamente a contracorriente del consenso político de nuestra época. Hayek y sus cofrades tuvieron el mérito de mantener sus creencias cuando el saber convencional los trataba como excéntricos o locos, y no se arredraron ante la “impopularidad” de sus posturas. Debemos hacer lo mismo, pero evitando un peligro que muchas expresiones de la izquierda no supieron sortear: el autoenclaustramiento sectario, que impide al discurso crítico trascender los límites de la capilla y salir a disputar la hegemonía burguesa en la sociedad civil. La más radical oposición al neoliberalismo será inoperante si no se revisan antiguas y muy arraigadas concepciones de la izquierda en materia de lenguaje, estrategia comunicacional, inserción en las luchas sociales y en el debate ideológico-político dominante, actualización de los proyectos políticos y formas organizacionales, etc. En síntesis: estar a

contracorriente no necesariamente significa “darle la espalda” a la sociedad o aislarse de ella. Volveremos sobre esto más adelante, en el capítulo siete.

Segundo, el neoliberalismo fue ideológicamente intransigente, y no aceptó ninguna dilución de sus principios. Fueron su “dureza” y su radicalidad los que hicieron posible su sobrevivencia en un clima ideológico-político sumamente hostil a sus propuestas. El compromiso y la moderación sólo hubieran servido para desdibujar por completo los perfiles distintivos de su proyecto, condenándolo a la inoperancia. La izquierda debe tomar nota de esta lección, siendo consciente de que la reafirmación de los principios socialistas no nos exime de la obligación de elaborar una agenda concreta y realista de políticas e iniciativas susceptibles de ser asumidas por gobiernos posneoliberales. Hayek y los suyos tuvieron estas recetas disponibles cuando el keynesianismo daba muestras de agotamiento. Nosotros todavía no las tenemos, pero nada autoriza a pensar que los obstáculos que existen sean insuperables. En los años treinta fueron muchos los que dijeron que la burguesía había hallado en John M. Keynes “el Marx burgués”. Parafraseando esos dichos podría decirse que las fuerzas populares y todo el arco social condenado por los experimentos neoliberales están a la espera de la aparición del “Keynes marxista”, capaz de sintetizar la crítica al capitalismo de Karl Marx con un programa concreto de política económica capaz de sacar a nuestras sociedades del marasmo en que se encuentran. La sola exposición de las lacras y la miseria producidas por el capitalismo no bastará para hallar una salida “por izquierda” a la crisis actual.

Tercera lección, no aceptar ninguna institución establecida como inmutable. La práctica histórica demostró que lo que parecía una “locura” en los años cincuenta –crear 40 millones de desocupados en la OCDE, reconcentrar ingresos, dismantelar programas sociales, privatizar el acero y el petróleo, el agua y la electricidad, las escuelas, los hospitales y hasta las cárceles– pudo ser posible y a un bajísimo costo político para los gobiernos que se empeñaron en dicha empresa. La “locura” de pretender acabar con el desempleo, redistribuir ingresos, recuperar el control social de los principales procesos productivos, profundizar la democracia y afianzar la justicia social no es más irreal y “utópica” que la que, en su momento, encarnó la propuesta neoliberal de Hayek y Friedman. Su triunfo demuestra la “insoponible levedad” de las instituciones aparentemente más consolidadas y de las correlaciones de fuerza supuestamente más estables y arraigadas. ¿O es que habremos de creer que, con el triunfo de la democracia liberal y el capitalismo de libre mercado, la historia ha efectivamente llegado a su fin?

Debemos, en consecuencia, ser conscientes de que un proyecto socialista, pensado de cara al siglo XXI, también es posible y que no es más utópico que el que prohicieron los neoliberales en los años de la posguerra. Ellos perseveraron y triunfaron. Si la izquierda persevera y tiene la audacia de someter a revisión sus premisas y sus teorías, su agenda y su proyecto político –tal cual lo hicieran Marx y Engels desde 1845 en adelante– también ella podrá saborear las mieles del triunfo y el más noble sueño de la humanidad podrá comenzar a cumplirse antes de lo sospechado. Una curiosa coincidencia nos permite rematar este argumento acerca del “realismo” de las utopías. Curiosa, porque se produce entre dos intelectuales que difícilmente podrían estar más enfrentados entre sí: Max

Weber y Rosa Luxemburg. Recordemos que el primero, con su habitual mezcla de desprecio e irritación por los socialistas, llegó al extremo de afirmar, según lo atestigua uno de sus más importantes estudiosos, que “Liebknecht debía estar en un manicomio y Rosa Luxemburg en un zoológico” (Giddens, 1976, p. 39). En 1919, y en dura lucha contra el pesimismo y la desilusión que cundían en una Alemania derrotada y desmoralizada, Max Weber tuvo ocasión de reflexionar, probablemente sin advertirlo, sobre el papel de las utopías. Como sabemos, si había un tema muy ajeno a sus premisas epistemológicas –fundadas sobre una rígida separación entre el universo del ser y el de los valores– era precisamente la cuestión de las utopías. Sin embargo, en *La política como vocación* escribió unas líneas notables en donde reconocía que “en este mundo no se consigue nunca lo posible si no se intenta lo imposible una y otra vez”, y exhortaba al mismo tiempo a soportar con audacia y lucidez la destrucción de todas las esperanzas –y, diríamos nosotros, de todas las utopías– porque, de lo contrario, “seremos incapaces de realizar incluso aquello que hoy es posible” (Weber, 1982, pp. 363-364). Una reflexión no menos aguda había formulado –pocos meses antes, y en el mismo país– Rosa Luxemburg. En vísperas de su detención y posterior asesinato, y avizorando con su penetrante mirada el ominoso futuro que se cernía sobre Alemania y la joven república soviética, la revolucionaria polaca decía que “cuanto más negra es la noche, más brillan las estrellas”. Lejos de extinguirse, la necesidad del socialismo se acentúa ante la densa oscuridad que el predominio del capitalismo salvaje arroja sobre nuestras sociedades. Palabras hermanadas aquéllas, de dos brillantísimos intelectuales que en grados diversos coincidieron, sin embargo, en no renunciar a sus esperanzas y en negarse a capitular –Weber ante “la jaula de hierro” de la racionalidad formal del mundo moderno, Rosa ante el capitalismo y todas sus secuelas. Sus palabras sugieren una actitud fundamental que no deberían abandonar quienes no se resignan ante un orden social intrínseca e insanablemente injusto como el capitalismo y que, pese a todo, siguen creyendo que todavía es posible construir una sociedad mejor.